

# Territorio corporativo, fragmentación socioterritorial y respuestas locales en el Chile post-terremoto, Región del Biobío

Sandra Fernández\*

## Resumen

Este ensayo aborda el concepto de *territorio corporativo* con el propósito de examinar el rol que ejerce la gran empresa forestal en la configuración territorial de la Región del Biobío, dominada por esa industria desde hace unos cuarenta años. Algunos elementos teóricos permiten identificar prácticas espaciales materializadas en la construcción de alianzas territoriales con fuerte anclaje local, nacidas en un territorio profundamente fragmentado, tanto por la intervención de actores privados –la gran empresa forestal– como del Estado, las políticas públicas subsidiarias y clientelistas. En un escenario de descomposición de los tejidos sociales a nivel nacional, reconocemos las constantes y cada vez más articuladas acciones de micro-actores que, enfrentados a situaciones extremas, generan o fortalecen alianzas de fuerte base territorial. Ante un fenómeno socionatural, como el terremoto vivido el 27 de febrero de 2010, se desataron diversas prácticas y argumentaciones, movidas por las contradicciones extremas a que ha llevado la rigidez y obnubilación de los defensores del neoliberalismo implementado en Chile. Las alianzas renacidas ante el desastre se sustentan en proyectos políticos más o menos explícitos, donde el espacio local es el escenario de esas acciones de colaboración, pero también de conflicto, que plasman discursos de (post)desarrollo en Chile.

**Palabras clave:** Territorio corporativo, Anclaje local, Terremoto 2010, Región Biobío

## Corporate territory, territorial socio- fragmentation and local responses in post-quake Chile, Biobío Region

### Abstract

This paper addresses the concept of corporate territory to examine the role of the forestry industry in Biobío Region, which has been dominated by this industry for forty years. Some theoretical elements help to identify spatial practices embodied

---

\* Docente e Investigadora en áreas de Geografía Humana. Departamento de Geografía, Universidad de Concepción, Chile. Email: sandrafernandez@udec.cl

in the development of strongly rooted territorial alliances. Such alliances were set in a deeply fragmented territory thanks to the intervention of private actors such as the large forestry company and state enterprise, subsidiary and clientelistic public policies. In a context of disintegration of the national social network, it is possible to recognize the permanent and increasingly articulated actions of actors at micro level. These actors reinforce and build up alliances on strong territorial basis. Faced with a socio-natural phenomenon like the disaster that took place on February 27, 2010, varied practices and arguments were developed due to the fundamental contradictions that neo-liberalism implemented in Chile. Reborn alliances underpin political projects that are more or less explicit. The local space is not only the scenario of collaborative actions, but also conflicts which shape post-development discourses in Chile.

**Key words:** Corporative territory, Local roots, 2010 earthquake, Biobío Region

## Introducción<sup>1</sup>

Desde un abordaje clásico de la geografía crítica latinoamericana, este ensayo indaga sobre algunos elementos conceptuales que, materializados en un espacio relacional, serían sustento de una configuración de territorios corporativos en América Latina en general y Chile en particular. Lejos de presentar este modelo conceptual como un axioma realizamos más bien un ejercicio de interrogación de aquél, de sus formas y principios, que sirven de punto de partida al examinar un momento y lugar específico en la historia reciente de Chile. Queremos explorar e ilustrar el alcance, poder y vocación expansiva de macro actores relevantes en tiempos de globalización –las grandes corporaciones– que imponen sus propias lógicas en los territorios de acuerdo a sus necesidades siempre cambiantes. Esta reflexión se detiene en un momento crucial para Chile y particularmente nuestra Región –el periodo post-terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010– con el fin de inquirir sobre las formas de resquebrajamiento desatadas a partir de esa catástrofe, de un discurso hegemónico sostenido hasta entonces por una red de “dispositivos de poder” que regulaba las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales en el país. Pero lo hegemónico nunca es completo y para siempre; es aquí donde hacemos ilación con las acciones y agencias elaboradas por sujetos sociales que permiten la transformación social, enfatizando que ese proceso no es unívoco ni libre de contradicciones (Ema, 2004). La fragilidad del ‘milagro chileno’ quedó dolorosamente expuesta al amanecer del 27 de febrero de 2010. Las enormes desigualdades, las distintas escalas de pobreza y la gran fragmentación del tejido social, fueron develadas tras la ocurrencia de ese fenómeno sicionatural. En un contexto local, surgen preguntas respecto a la pertinencia de hablar de un territorio corporativo configurado en la Región del Biobío (Fig. 1) que ha visto los últimos cuarenta años transformar su espacio rural en grandes extensiones de plantaciones destinadas a la industria de monocultivo de especies introducidas en el país (principalmente *Pinus radiata* y *Eucalyptus*), desarrollo fuertemente patrocinado por el Estado desde 1974 y que, según veremos, promovió la conformación de conglomerados empresariales que concentran gran parte de la producción silvícola a nivel nacional.

En la siguiente sección, contextualizamos el estudio atendiendo a la serie de normativas estatales que marcaron una profunda transformación en el uso del territorio en la región, junto a una breve reseña del proceso de investigación realizado y los actores involucrados en el mismo. Nuestro marco teórico se centra en la categoría de territorios corporativos, como lo trabajara Milton Santos, ilustrando cómo se configura un territorio usado actualmente, ejemplificando este proceso en la Región del Biobío. En este contexto, actores como la gran empresa,

<sup>1</sup> Este ensayo es parte del trabajo colaborativo iniciado inmediatamente después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, por la Universidad de Concepción, orientado a contribuir con conocimiento experto a la comunidad e instituciones regionales a través del diagnóstico de daños y el diseño de planes de reconstrucción post-terremoto. La autora agradece a las organizaciones sociales de la Región del Biobío y a los y las estudiantes de la Universidad de Concepción, por su marcado compromiso con la resolución de problemas socioespaciales.

organizaciones sociales, sindicales y productivas, junto al Estado en su gestión local, establecen relaciones de cooperación y conflicto, asimétricas pero dinámicas. La cuarta sección está dedicada a definir más claramente los actores que habitan localidades rurales y urbanas y la forma en que, a pesar de la fragmentación que caracteriza la era global, producen y construyen relaciones espaciales que permiten la generación de otras formas de vida. Por último, reflexionamos acerca de las tensiones nacidas del permanente movimiento de acciones globales asociadas o en choque con otras locales, que conformaría lo que Santos (2004: 67) denomina “la esquizofrenia del territorio”.

### Densidad normativa y producción de territorio

En octubre de 1974 se aprobó el Decreto Ley 701, firmado por la Junta Militar y los civiles que daban el “respaldo técnico”. Este establecía los criterios para clasificar un terreno como forestal o de aptitud preferentemente forestal y para ello consideraba como aptos para la forestación “todos aquellos terrenos que técnicamente no sean arables, estén cubiertos o no de vegetación, excluyéndose los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva” (Gobierno de Chile (d): DL 701, Título I, Artículo 3°). Un análisis básico del contenido revela la ambigüedad y permisividad de la ley. Plantear que se excluirán los terrenos que no sufrirán degradación usándolos intensivamente es no excluir ninguno. Este decreto estableció una bonificación del 75 % de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. El apoyo a quienes invirtieran en la plantación de especies foráneas tenía el propósito de impulsar un negocio que, aunque se venía masificando desde hace algunas décadas, no lo había hecho con la intensidad que deseaba el empresariado forestal. Según constata el propio Estado, entre 1974 y 1994, se plantaron 1.700.000 hectáreas, en su mayoría con *Pinus radiata* y *Eucalyptus*, de las cuales 807.203 fueron bonificadas (CONAF, 2011).

En 1998, el Decreto 701 se modifica con el propósito que los pequeños propietarios también recibieran, con mayores facilidades, bonificaciones para forestar. La forma de hacerlo fue beneficiar a aquellos con un 90 % de las primeras 15 hectáreas forestadas y un 75 % a las restantes. Esto sucedió por 15 años, a partir de 1996. Las razones de esta iniciativa estuvieron en el intento constante de las empresas de disminuir los costos de producción. Para el empresariado forestal, la propiedad de los terrenos implicaba (e implica) una serie de riesgos, como incendios y plagas. Es por eso que, sin buscar que los pequeños propietarios le vendan sus terrenos se propicia que los foresten con pinos y eucaliptos; así, al controlar toda la cadena productiva, las grandes empresas podrían influir sobre el precio de la madera. También se consigna un mecanismo para clasificar a comunidades indígenas en el rango de pequeño propietario. Esta modificación rindió sus resultados. El porcentaje de hectáreas bonificadas a pequeños propietarios pasó del 5

% entre 1974 y 1997 al 39 % entre 1998 y 2010 (El Ciudadano, 2013; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).

En 2011 esta tendencia se profundiza mediante una nueva modificación del decreto creándose la figura del *mediano propietario* y una escala de bonificaciones para cada tipo de propietario. Para los pequeños, se asigna un 90 %; para los medianos, un 75 %; para los grandes, un 50 %. Junto con esto, se prorroga por dos años más lo estipulado en 1998. En el año 2012 se cumplió el plazo y es en este contexto en que el gobierno de Piñera envía a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que “modifica y extiende” el Decreto 701/74. La superficie cubierta por plantaciones forestales en la región representa el 44,3 % del total nacional (INFOR, 2009) y el 42 % de la superficie regional (INE, 2011; Gobierno Biobío, 2007). El sector forestal está concentrado en dos grandes conglomerados: Grupo Arauco y Grupo CMPC (Compañía Maderera de Papeles y Cartones). Los mismos dos grandes conglomerados en Chile, que colocan sus inversiones en el campo de la energía y combustibles, actividad portuaria, pesquera y bancaria (ILO, 2013). En un nivel más bajo se encuentra la empresa MASISA, dedicada principalmente a la manufactura de la madera. Estas tres grandes empresas transnacionales concentran el 59 % del total de las plantaciones forestales del país (2,7 millones de hectáreas) como señala el estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo.

Metodológicamente y para los fines de este ensayo, trabajaremos con algunas categorías emergentes de las narrativas de los actores sociales que participaron en la articulación de prácticas colectivas en tiempos de emergencia. Esa articulación queda plasmada en lo que identificamos como la construcción de alianzas territoriales con diferentes niveles de pertenencia que surgen, sin embargo, como respuesta a la racionalidad técnica e individual que ha construido en estos cuarenta años una “ciudadanía de mercado”, haciendo de los ciudadanos meros usuarios de políticas asistencialistas. Esta investigación está orientada hacia la realidad social más próxima de las personas y se pone en marcha en un contexto de escala humana. Es un proceso dialéctico de conocer–comprender–actuar–re-conocer, donde la comunidad deja de ser objeto y pasa a ser sujeto de la investigación. Este ensayo recoge parte de los resultados de dos investigaciones paralelas: una de carácter interdisciplinar iniciada inmediatamente después de ocurrido el terremoto de 2010, que incluyó el trabajo con una organización nacional consolidada (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI) y otra nacida producto de la catástrofe (Red Construyamos). La segunda investigación toma cuerpo un año más tarde, producto de un nuevo desastre que azotó la región: la ocurrencia de los mayores incendios forestales vividos en la zona, afectando muchas veces a las mismas familias. En el análisis de los discursos que circulan en las organizaciones sociales locales, podemos alcanzar un cierto nivel de abstracción, en que lo discursivo se transforma en la dimensión crucial para establecer los vínculos entre las relaciones sociales y socio-espaciales que explora este ensayo. Los diálogos, textos escritos, entrevistas y cartografía social, conforman el *corpus* del trabajo etnográfico realizado.

A cuatro años de aquel *megasismo*, el mundo político chileno se ve enfrascado en una guerra de acusaciones respecto a culpas y responsabilidades de la tragedia. En medio de conmemoraciones por el “27F”, las incongruencias en la rendición de cuentas del Ejecutivo —el gobierno afirma que la reconstrucción alcanza un 99 % (MINVU 2014; Gobierno de Chile c)— impulsó a unas 20 organizaciones sociales a cuestionar fuertemente las cifras y el proceso en sí: algunas obras resultaron imperfectas, se denuncia el desplazamiento forzado de pobladores en ciudades del centro-sur de Chile, la escasa participación ciudadana y el nivel de hacinamiento al que se exponen los pobladores en las nuevas edificaciones construidas en áreas periféricas de la ciudad (Diario Electrónico Universidad de Chile, 2013; Visión del Maule, 2013; The Clinic, 2013). Se destacan entre aquellas organizaciones, el Movimiento Nacional para la Reconstrucción Justa, la Red-Construyamos, el Observatorio 27 de Febrero y la Organización Internacional “Hábitat por la Humanidad”, entidad presente en 120 países.

Vemos en esta ciudadanía, no necesariamente articulada en sus acciones y demandas, una arremetida que atraviesa las fisuras del modelo único que ha transformado a Chile en un territorio social y geográficamente fragmentado. Una ciudadanía crítica es parte de un proceso en construcción permanente de derechos y responsabilidades personales, orientado a proyectos colectivos de bien común. Bajo este prisma nuestro objetivo es aportar, desde algunas consideraciones teóricas derivadas de la geografía crítica latinoamericana, al reconocimiento de prácticas espaciales materializadas en la construcción de alianzas territoriales con fuerte anclaje local, nacidas en un territorio profundamente fragmentado, tanto por la intervención de actores privados (la gran empresa forestal), como del Estado (las políticas públicas subsidiarias y clientelistas). Sostenemos que la fragmentación socioterritorial identificada en la región, ha tomado forma durante los últimos cuarenta años de implementación de un modelo de desarrollo hegemónico que ha transformado el territorio regional y nacional en un territorio corporativo (Santos, 1996; 2004; Silveira, 2007). Interesa en este marco, abordar las categorías de territorio usado y territorio corporativo en un contexto específico, que no obstante encuentran réplica en muchas regiones producto de las dinámicas de la globalización. No es el propósito de este ensayo analizar las grandes firmas y su funcionamiento específico, su organización interna o cifras de transacciones o beneficios, sino las dinámicas que se cristalizan en los territorios usados y ocupados por la gran empresa conformando tipologías de “fijos [bancos, escuelas, fábricas] y flujos” [producción, distribución, consumo].

### **Territorio “usado” en tiempos de globalización**

Recogiendo perspectivas teóricas que tratan de dilucidar las complejas formas en que el territorio es usado en tiempos de capitalismo tardío en Chile, apostamos por realizar un ejercicio de lectura del territorio como un sistema que contiene

materialidad y acción en constante interrelación. El espacio físico y el social son actores del acontecer social, político y económico y es en ese espacio geográfico donde intervienen macro-actores como las grandes empresas y el Estado, junto a otros actores locales con muy disímil capacidad de intervenir en la construcción de su propio destino. Los interrogantes conceptuales que guían este ensayo se encuentran plasmados en la materialización de acciones y agencias elaboradas por diversos actores ante la desprotección y desconcierto, acciones elaboradas en una realidad relacional (Santos, 1996) donde participan “objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales” (Santos, 1996: 28) junto y en relación con una sociedad en movimiento. Si consideramos una sociedad local (González, 2008) como el producto de complejas relaciones sociales, cargadas de tensiones y cooperación, debemos incluir en ellas a todos los agentes locales y regionales (grandes firmas, empresas locales, cámaras de comercio, municipios, ONGs, universidades regionales y otros) que construyen territorio desde el conflicto o la cooperación y que tensionan el modelo único de desarrollo asentado en Chile desde 1973.

El territorio corporativo se refiere a la particular configuración en que aquel es usado en tiempos de globalización. Hacemos énfasis en que este territorio no es homogéneo; está atravesado por relaciones de conflicto, pero también de colaboración. Las tensiones que nacen de esas relaciones son ilustradas en este ensayo por las prácticas espaciales diversas articuladas por organizaciones sociales en la Región del Biobío en el periodo post-terremoto. Dichas acciones van desde la construcción de alianzas surgidas de la autogestión y organización territorial de base local, hasta el inmovilismo social que resulta –sugerimos– de una política pública subsidiaria fuertemente asentada en comunidades y barrios en situación de pobreza, que en ciertos contextos, transforma a los sujetos en receptores poco críticos de los distintos Programas Sociales implementados en Chile durante el periodo señalado.

El principal instrumento de combate a la pobreza en América Latina en general, son los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC, *conditional cash transfers*) o “con corresponsabilidad” (CEPAL, 2011). Es decir, los PTC entregan recursos a familias en situación de pobreza o pobreza extrema y establecen condiciones centradas en, por ejemplo, asistencia a la escuela y a los controles de salud. A la luz de los constantes desastres que azotan la Región del Biobío, este artículo quiere relevar la estrecha relación existente entre las acciones de actores sociales locales y la continua respuesta fraccionada de las instituciones gubernamentales que intervienen el territorio a través de una tecnoburocracia que, se sugiere, es alimentada y fortalecida por la acción de programas paliativos, cortoplacistas, caracterizados por su homogeneidad, desconociendo las particularidades de los lugares que construyen el territorio.

Siguiendo a Santos (2004) en la era de la globalización los lugares están en permanente competencia –la llamada “guerra de lugares”– que entrega nueva

importancia a los territorios, siendo estos el sustento de los movimientos de la sociedad actual basada en los nuevos y cambiantes fenómenos como la técnica, la información y las finanzas: “los actores más poderosos se reservan los mejores pedazos del territorio y dejan el resto a los otros” (Santos, 2004: 67). El uso del territorio por macro-actores como la gran empresa se manifiesta en impactos concretos que abarcan desde el nuevo uso que se da al suelo, hasta las transformaciones en las relaciones de género, surgidas de las nuevas demandas y necesidades de esos actores.

Las grandes firmas corporativas escogen unos lugares y abandonan otros siguiendo su propia racionalidad, usando y ocupando el planeta de manera física, pero también política (Santos, 2004). El espacio geográfico como totalidad se construye a través de dos movimientos dominantes: las verticalidades y las horizontalidades (Santos, 1996; 2004; Silveira, 2007). El trabajo de Santos sobre este tema comenzó con el libro *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción* (1996) y fue abordado desde ángulos diferentes en su último libro *Por otra globalización* (2004). Esta forma de compartimentar el territorio resulta útil para realizar una lectura de los cambios ocurridos en Chile y particularmente en la región: desde el punto de vista productivo, de organización del trabajo y de la composición social y cultural. El espacio de las verticalidades consume las horizontalidades, estas últimas representadas por los actores sociales subordinados y por las acciones ligadas al lugar, que elaboran de manera no siempre visiblemente articulada.

Según Santos (1996; 2004) las verticalidades de un territorio están definidas por un conjunto de puntos que forman un espacio de flujos adecuados a tareas productivas hegemónicas; incluye principalmente a actores del tiempo rápido que sacan provecho del proceso; son los “macro-actores” externos al área quienes determinan y organizan el trabajo de todos. Así, las macro-empresas consiguen dominar y regular el espacio, junto a la acción implícita o no, del Estado. Los intereses corporativos, por tanto, prevalecen frente a los públicos; el modelo económico imperante se reproduce, el territorio es visto como un recurso y los espacios se ven obligados a “modernizarse” constantemente, tornándose más alienados. Los macro-actores son los responsables de la materialización de un sistema de producción controlado por actores externos al lugar; quienes toman las decisiones esenciales respecto a cómo se llevará a cabo, por ejemplo, un cambio sustancial del uso de recursos y de las formas en que eso afectará el empleo en un lugar específico. Ejemplos de verticalidades encontramos en el comercio internacional, las demandas de la gran industria, en las políticas públicas diseñadas por actores externos al país o región, etc., (Pessôa, 2009).

Por otro lado, las horizontalidades la conforman el “espacio banal”, aquel que pertenece a todos: empresas grandes y pequeñas, instituciones locales, personas, vivencias. Todos los actores en ese espacio están implicados en distintas producciones localizadas e interdependientes, en los tiempos rápidos y lentos. Las cor-



poraciones que gobiernan el territorio, como sostenemos más arriba, organizan el trabajo de todos los demás, fortaleciendo las verticalidades, los comportamientos fragmentados, un tipo de solidaridad organizacional contrapuesta a una solidaridad orgánica donde el espacio geográfico es construido por agentes comunes en un territorio común (Santos, 1996; 2004). Ilustramos la configuración de horizontalidades en el último apartado de este ensayo, definiendo las redes y alianzas constituidas, como sujetos que actúan en un espacio relacional. Fortalecer este espacio de las horizontalidades, de lo contiguo, cercano, sería una premisa para producir transformaciones profundas en la organización de la sociedad.

El desarrollo de verticalidades en la ocupación de un territorio es también identificable desde la acción directa del Estado a través del diseño e implementación de programas para combatir la pobreza. Sostenemos aquí que la forma que han asumido las políticas públicas en tiempos neoliberales –por ejemplo los PTC– fortalece la fragmentación social y espacial, profundizando así la atomización del mundo social. En Chile destaca el Programa Chile Solidario (CHS) que transfiere recursos a familias en situación de pobreza e incluye el “Programa Puente”, un trabajo psicosocial de acompañamiento que realizan profesionales en los hogares de los denominados “usuarios” durante un año (Carneiro *et al.*, 2009). Estos programas evidencian las complejas formas de relación e interacción entre sociedad civil y el Estado neoliberal, construyendo lo que Shield (1998) conceptualiza como una “ciudadanía de mercado”.

Consistente con esta afirmación, Retamozo y Garrido (2010: 7) sostienen que “el objetivo esencial de racionalizar y efectivizar el gasto a través de una vinculación técnica e individual, desalienta la cooperación, poniendo como destinatarios solo a lo más pobres. Con esto, se disocia el sistema político de las demandas de diferentes sectores sociales y se transmite la señal que las necesidades deben ser resueltas a través de la participación en el mercado” (énfasis añadido). Los PTC responden a una racionalidad contrapuesta a los sistemas universalistas de protección social y están diseñados para “aliviar”, no “superar” la pobreza (Correa, 2007). Son las mujeres las ‘beneficiarias’ directas de las transferencias y también quienes deben responder a las condicionalidades; esto podría significar el ejercicio de un mayor control de las mujeres en las decisiones del hogar mas no el desarrollo de capacidades como la autonomía o el aumento en las decisiones estratégicas (Molyneux, 2009). Estos programas no logran instalar servicios y políticas públicas para crear autonomía en relación con la inserción laboral femenina y reproducen una visión “maternalista” del acceso a los recursos públicos (CEPAL, 2011: 153).

Importa aquí comprender las consecuencias en las autopercepciones sobre exclusión o acceso a derechos de las personas en general; es decir, la forma en que las ciudadanías subjetivas, tanto individuales como colectivas, se ven afectadas al llevar a las personas a percibirse como sujetos con distintos derechos unos frente a otros legitimando así la propia exclusión. En este contexto, se hace difícil articular

respuestas apropiadas ante emergencias sociales entre las ruinas epistemológicas, culturales, sociales y políticas de lo que de Souza Santos denomina la sociología de las ausencias y las emergencias (Tamayo, 2004).

Los fragmentos socioespaciales develados durante y después del desastre del 27 de febrero son reflejo de una ocupación del territorio por parte de macro-actores que, con la complicidad implícita o explícita del Estado, han pretendido anular la construcción de espacios horizontales, vividos y pensados por todos y todas. Un Estado que focaliza sus acciones en paquetes básicos de asistencia social a los más pobres bajo esquemas de transferencias condicionadas, asume un rol central y regulador en el proceso de acumulación por despojo (Harvey, 2004; 2011) a través de instrumentos tales como los tratados de libre comercio, los proyectos de ley sobre biodiversidad o la ley del “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (acceso a UPOV 91) aprobado por la cámara del senado chilena el 11 de mayo de 2011 (República de Chile, Senado, 2011).

### **Narrativas territoriales y categorías emergentes**

Se ha sostenido repetidamente que la gran empresa, apoyada por el Estado, asume un rol vital, ya que transforma las dinámicas presentes y por tanto, el futuro de un territorio:

“[La] localización corporativa en una región cambia las condiciones de la ecuación de empleo, de la estructura del consumo, del uso de infraestructuras, de la composición del presupuesto público, de la estructura del gasto público, del comportamiento de las demás empresas, de la imagen del lugar, de los comportamientos individuales y colectivos. La situación es más grave cuando la empresa altera rápidamente sus topologías, actualizando la noción de empresas y actividades *foot loose* propuesta por Hoover” (Silveira, 2009: 444).

El proceso de recuperación social iniciado tras la catástrofe vivida en el país hace casi cuatro años, ha sido muy lento e intrincado. El espacio material y social construido en Chile los últimos cuarenta años ha sido funcional a las necesidades y demandas de corporaciones nacionales o transnacionales y también del Estado y su aparato burocrático. Esta suerte de división del planeta en partes muy asimétricas, esboza un nuevo orden que dificulta el desarrollo de espacios construidos sobre la base de prácticas solidarias y de colaboración. Sabido es que la interrupción del proceso democrático en Chile en 1973 marcó el inicio de un lapidario proceso de control, represión e individualización. Así, poco a poco, desaparecieron sindicatos, organizaciones barriales, cooperativas de producción, etc.

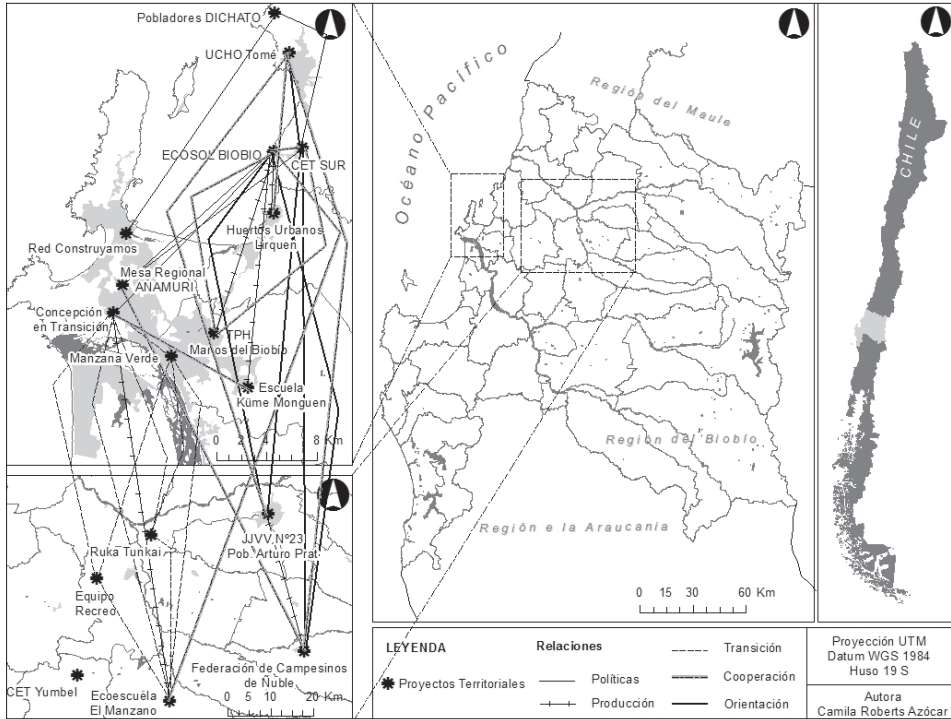
En este escenario de descomposición de los tejidos sociales a nivel nacional, no obstante, reconocemos las constantes y cada vez más articuladas tensiones

entre territorios constituidos por sus verticalidades y horizontalidades. Un modelo hegemónico no es estable ni permanente; en la dinámica de los subsistemas de puntos y flujos (Santos, 2004) se conforman redes de cooperación otras se fortalecen, asumiendo tareas no comprendidas ni resueltas por la institucionalidad. La diversidad de redes colaborativas están, al mismo tiempo, ligadas a su pasado: unas son abiertas y flexibles; otras funcionan bajo una lógica “de partido”.

Como hemos sostenido, el Estado ha desempeñado un rol fundamental en la definición de las formas y condiciones dispuestas para las nuevas formas de acumulación del capital, esta vez lanzando su ofensiva a “sectores” hasta entonces medianamente protegidos, como los fondos de pensiones, la salud y educación, las semillas y los bienes ambientales globales como el agua y la tierra, la acumulación por despojo, de Harvey (2004: 201) y Fernández (2011). Para organizaciones nacionales como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Ley de Obtentores Vegetales es un atentado directo a la soberanía alimentaria de los pueblos del “tercer mundo”, una pérdida de derechos humanos y un golpe certero a la aniquilación de productores y productoras agrícolas. Este escenario de desposesión de derechos, activos y territorios no está libre de resistencias. En contraposición a cierto grado de pasividad con que han reaccionado algunas poblaciones afectadas por el desastre del 27 de febrero del 2010 –poblaciones que han sido foco de las políticas asistencialistas de los gobiernos– organizaciones sociales de origen diverso se abren espacios para articular proyectos de reconstrucción de las materialidades, pero también y sobre todo, de las subjetividades individuales y colectivas, que permite destruir la lógica de la exclusión. La figura 1 da cuenta de la vitalidad social de la región, que confronta el rostro hegemónico del espacio construido por el poder de las firmas (Silveira, 2007; Harvey, 2004).

En la figura 1 queremos plasmar el entramado de redes que conforman lo que denominamos “Alianzas Territoriales” que, siguiendo la argumentación sostenida hasta ahora, fueron creadas o revitalizadas a partir de una catástrofe<sup>2</sup>. Es indudable que el poder de la gran empresa constituye un fuerte regulador de la vida política de las naciones haciéndolas muchas veces ingobernables y por tanto, incapaces de promover un desarrollo local o endógeno. Esta “privatización” del territorio configura una clara jerarquización de los espacios geográficos, modernizando unos y dejando al olvido otros. Sin embargo, identificamos la existencia de circuitos “inferiores” o “informales” de fuerte base territorial compuestos por organizaciones sociales diversas, que elaboran proyectos de desarrollo que aspiran a fortalecer prácticas autogestionadas y colaborativas. Es importante enfatizar que el concepto de “redes” es comprendido por Santos (1996) como un concepto profundamente ligado al poder, construidas para controlar el espacio y reproducir el poder de la clase hegemónica (Santos, 1996).

<sup>2</sup> Enfatizamos en este contexto, el rol desempeñado por la Universidad de Concepción en el proceso de identificar urgencias y la contribución de conocimiento experto prestada por sus académicos y académicas.



**Figura 1.** Alianzas territoriales. Fuente: elaborado por Sandra Fernández sobre la base de Camila Roberts Azócar.

En este ensayo, definimos redes como el resultado de un conjunto de relaciones que pueden existir tanto para integrar el territorio como para desintegrarlo, produciendo así una gran fragmentación socioterritorial. En el primer caso, las redes locales fortalecidas en tiempos de catástrofe actuaron como enlace y agentes a nivel local, desde sus lugares haciendo uso de una territorialidad cotidiana. Identificamos al mismo tiempo, la capacidad de control, intervención y hegemonía de redes compuestas por actores distribuidos en distintos lugares físicos, pero que transportan la “modernidad”, lo superior y racional a todos los rincones del planeta. Para Santos (1996) el discurso pragmático que sostienen las verticalidades está claramente personificado en las macroempresas que “ordenan o desordenan” todo el espacio.

La organización social que actúa como eje articulador de lo que denominamos “Alianzas Territoriales” en la región es ANAMURI, nacida en 1999. Sus propuestas se gestaron alrededor de tres ejes: la defensa de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria; la lucha por la tierra y el territorio y la igualdad y dignidad para las mujeres ([www.anamuri.cl](http://www.anamuri.cl)). En la figura 1 ilustramos la forma en que esta organización conformaría una “topología de alianzas”, en contraste a las topologías corporativas que configura la gran empresa. Las mujeres organizadas bajo esta asociación nacional plantean un proyecto político de recuperación de patrimonios

materiales e intangibles e hicieron funcionar su enorme ‘capital social’ inmediatamente después de producido el terremoto, así como también en enero de 2011, una vez reconocido el desastre ocasionado por los incendios forestales.

Otra importante red social es Red Construyamos (RC), definida como una asamblea de organizaciones sociales de Concepción creada tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 en Chile, que afectó particularmente a la región del Biobío. RC declara que “nacimos para defender a la comunidad del abandono y la acción injusta de los capitales y el Estado contra los damnificados y las damnificadas. Asumimos la unidad y la solidaridad con el movimiento social, única manera de reconstruir al pueblo e iniciar la lucha por una sociedad justa” ([www.redconstruyamos.org](http://www.redconstruyamos.org)). Esta red señala permanentemente que el proceso de reconstrucción post terremoto no disminuye el riesgo ante catástrofes, puesto que el gobierno ha privilegiado acciones de erradicación y construcción de viviendas precarias, en terrenos de alto riesgo y con materiales deficientes; por ejemplo, en los cerros de Talcahuano, ciudad-puerto gravemente afectada por el tsunami. Las nuevas viviendas han sufrido inundaciones producto de las lluvias debido a que no cumplen con los estándares básicos de construcción, son viviendas ligeras y sin firmeza en el terreno y en condiciones de diseño urbano que no permitirían a las instituciones de salvataje actuar en caso de nuevas emergencias.

Esta asamblea ciudadana denuncia particularmente una colusión entre políticos y empresarios del campo inmobiliario por la forma que tomó el proceso de reconstrucción, sin participación ciudadana y regido bajo premisas de rentabilidad para las empresas ([www.redconstruyamos.cl](http://www.redconstruyamos.cl)). Hoy, un total de 693 familias de la región, viven en campamentos (El Sur, 2013).

Desde las narrativas recogidas en el trabajo de campo e interpretadas a través de un proceso de codificación cualitativa rescatamos algunas categorías empíricas emergentes en los discursos de organizaciones y actores sociales. La tabla I recoge las orientaciones centrales de casi una veintena de organizaciones sociales, cuyos principios y prácticas pueden ser clasificados en categorías conceptuales, las que sin embargo no son puras ni excluyentes. Las relaciones que surgen de las prácticas y discursos de diversos “Proyectos Territoriales” conforman un enrejado de relaciones que clasificamos atendiendo a criterios como su origen y principios planteados, enfatizando que lo predominante en ese enrejado es, precisamente, el cruce de misiones y visiones elaboradas por hombres y mujeres construyendo territorio en áreas urbanas y rurales.

Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2001) una de las características más claras de los movimientos sociales en América Latina es que no son puros productos de la multidimensionalidad de las relaciones sociales, por un lado y de los sentidos que se le otorgan a la acción colectiva, por otro. Los movimientos sociales se nutren de muchas energías que pueden incluir desde formas orgánicas de acción social dirigidas a lograr el control del sistema político y cultural, hasta modos de

participación cotidiana de autoreproducción societarias. Realizamos una suerte de síntesis conceptual para representar el énfasis que las organizaciones sociales dan a su accionar y que clasificamos en a) Construcción de redes rur-urbanas y prácticas solidarias, b) El derecho a la ciudad y c) Formación y colaboración transversal.

Categoría	Organizaciones
Construcción de redes rur-urbanas y prácticas solidarias (de producción, comercialización, colaborativas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ANAMURI</li> <li>- Confederación campesinos(as) de Ñuble</li> <li>- Cet Sur</li> <li>- Cet Yumbel</li> <li>- JJVV Población Arturo Prat</li> <li>- Mesa Regional Anamuri</li> <li>- Manos del Biobío</li> <li>- UCHO (Unión Comunal de Huertos Urbanos)</li> <li>- Ecosol Biobío</li> <li>- Ruka Tunkal</li> </ul>
Derecho a la ciudad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Red-construyamos</li> <li>- Pobladores Dichato</li> </ul>
Formación y colaboración transversal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPH: trabajo para un hermano</li> <li>- Concepción en transición</li> <li>- Huertos urbanos Lirquén</li> <li>- Manzana verde</li> <li>- Eco Escuela El Manzano</li> <li>- Equipo Recreo</li> </ul>

**Tabla I.** Proyectos territoriales, Región del Biobío.

Fuente: elaborado por Sandra Fernández.

Las prácticas y discursos de las diversas organizaciones están marcadas por su multidimensionalidad y por la relevancia que dan a las acciones colectivas. Todas son por definición, políticas. Unas tienen como misión central el cultivo orgánico de hortalizas destinado al mercado local, apuntando a la necesidad de fortalecer la autonomía; otras levantan un claro discurso campesinista, dirigiendo su crítica al Estado y sus políticas públicas, que han debilitado la economía rural a través de, como señaláramos, la promoción del monocultivo a gran escala. Son redes en movimiento, menos intervenidas por políticas públicas clientelistas y con capacidad de reacción y respuesta a urgencias como las vividas por los habitantes de nuestra región. Identificamos en esas Alianzas Territoriales, las horizontalidades construidas por actores sociales que dan sentido al lugar que habitan:

“...Este Movimiento [de Territorios Solidarios] es muy importante porque incluye a muchos académicos y estudiantes universitarios también, tenemos que tratar de comunicarnos, hay una gran brecha entre los movimientos sociales y el mundo académico...Por eso trabajamos con estudiantes de

agronomía de la universidad, con agroecología y entonces se realiza un intercambio de conocimientos y sabidurías. Nosotras estamos en contra del presente esquema del gobierno para la agricultura, nuestra pelea es por poner la soberanía alimentaria y la agroecología en el centro de las políticas para el campo... La asociación en que participo es parte también de la “Red de Mujeres Protectoras de la Biodiversidad del Biobío” y de la Mesa Rural Regional donde participan 45 organizaciones, son en total unas 1500 mujeres... Nosotras estamos en el camino de Vía Campesina, el Encuentro es a nivel continental, la propuesta es de soberanía alimentaria también para el Biobío... Nosotras queremos ir hacia el “vivir de la tierra”, no depender de las empresas. ¿Cómo podemos conciliar esto de ser autónomos y además poder comercializar? Nosotras hablamos de mercados locales, de economía solidaria. A mí me gusta mucho el concepto que tienen los ecuatorianos del “buen vivir”, en parte es comer limpio. Hay que visibilizar el trabajo de las mujeres en la agricultura limpia, solo hablar de microempresarios y emprendedores es algo salvaje!. Una tarea importante es cómo involucramos a los hombres en esta labor...” (Entrevista realizada por Sandra Fernández a dirigente regional ANAMURI el 20 de mayo de 2010.)

## Reflexiones

El espacio banal —representado por las horizontalidades— es capaz de penetrar el discurso y acciones de los sectores hegemónicos construyendo otras racionalidades (o contra-racionalidades). Fueron estas las que permitieron la articulación de redes sociales diversas que, constituidas en actores sociales eficientes y eficaces, movilizaron recursos materiales (alimentos, agua, vestuario) y simbólicos (contención y abrigo), con el propósito de satisfacer necesidades inmediatas que los planes de emergencia diseñados e implementados por la tecnoburocracia neoliberal fue incapaz de poner en marcha.

Una Alianza Territorial se constituyó en los meses posteriores a la catástrofe, conformada por redes autodenominadas “solidarias”, que podría catalogarse como un “nuevo” movimiento social, nacido a pesar de la hegemonía de mercado, o más bien, en oposición a esa. Estos movimientos mantienen una doble relación entre regulación, control y emancipación junto a la construcción de ciudadanía. Son movimientos “impuros”, nuevos protagonistas de acciones marcadas por la innovación y transformación social. Estas organizaciones elaboran prácticas concretas de colaboración basadas en proyectos productivos (intercambio de semillas, por ejemplo), que son al mismo tiempo proyectos políticos de construcción de nuevos territorios definidos por horizontalidades, por una integración solidaria que es de carácter económico, social, cultural y claramente, geográfica. Esta Alianza Territorial compuesta por organizaciones productoras de territorios solidarios, representada en la figura 1 es un movimiento que se re-articula y reinventa en medio de los avatares en que se debate la ‘política’ formal chilena.

En oposición a estas prácticas espaciales que construyen territorios solidarios, existen poblaciones enteras que siguen siendo sujeto de políticas subsidiarias y planes de reconstrucción sostenidos por el gobierno, que han sido sujeto de profundas críticas (ver por ejemplo los trabajos de Letelier y Boyco (2011a; 2011b) en relación con el proceso de reconstrucción en la ciudad de Talca). Los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) como rediseño de intervención pública en materia social, cumplen a su vez el rol de desactivación política y disciplinamiento de la sociedad (en el sentido Foucaultiano).

Identificamos en el trabajo de campo desarrollado en la región algunas poblaciones fuertemente afectadas por el devastador tsunami, que han mostrado mayor dificultad en encontrar respuestas a la emergencia. Estos ciudadanos(as) de mercado han estado expuestos a programas asistencialistas de carácter “innovador” en el sentido de las condiciones exigidas para la transferencia de recursos que responde a una racionalidad de selectividad y no a un sistema universalista de protección social. Los(as) ‘destinatarios’ de los recursos transferidos son los más pobres y operan como alivio en casos de desastres, riesgos o crisis. La apatía que generan estas políticas sociales de mercado contribuye a profundizar la fragmentación social marcada por profundas grietas que impide a la gente –gran parte son mujeres jefas de hogar– construirse como sujetos activos, dueños de su futuro.

Ante la escasa y deficiente gestión gubernamental de la catástrofe del 27 de febrero, en todas las zonas devastadas por el terremoto y el tsunami comienzan a articularse redes que han elaborado prácticas diversas en el proceso de reconstrucción, con resultados variados. En la región del Biobío se configura la Red-Construyamos, una plataforma ciudadana que incluye a 29 agrupaciones de base territorial compuesta por profesionales, organizaciones sociales y funcionales heterogéneas. Esta organización tiene como objetivo principal apoyar a la población afectada por esta catástrofe, pero desde una perspectiva de mediano y largo plazo, evitando el asistencialismo ([www.redconstruyamos.org](http://www.redconstruyamos.org)). El trabajo etnográfico realizado en la región incluye también a actores sociales organizados previamente al terremoto, quienes redirigieron sus prácticas espaciales hacia la construcción de poder social, en donde parte de los conceptos clave son la autogestión y la democracia participativa (conceptos que requerirían indudablemente de una larga revisión que escapa a los fines de este artículo). El protagonismo de las mujeres caracteriza a estas organizaciones y movimientos locales y regionales.

Nos importa aquí relevar el papel que le cabe a las diferentes disciplinas y ciencias en situaciones críticas como la acontecida el 27 de febrero de 2010, en la producción y manejo del conocimiento estratégico, a menudo muy distante de las comunidades que sufren los efectos de las políticas, de las planificaciones, de las negligencias institucionales que el modelo chileno ha mostrado claramente. En este ensayo hemos identificado algunas prácticas espaciales y espacios de representación (Lefebvre, 1991) como aquellos vividos, llenos de significados,



“densos”, que surgieron de la historia individual y colectiva experimentada por los(as) sujetos en situación de emergencia. Estos espacios de representación producen territorios y lugares que resisten “ser borrados del mapa de la historia” (Keith y Pile, 1997).

Las políticas subsidiarias implementadas bajo los principios de la tecnocracia neoliberal nos hace creer que el ejercicio financiero, el lucro, la competitividad y el emprendimiento son la única forma de construir sociedad en el mundo contemporáneo. Es el discurso único basado en el dogma de la existencia de un conocimiento experto que ha invisibilizado a las comunidades locales y su enorme capacidad de autogestión quienes, pese a la desarticulación y fragmentación socio-espacial que predomina en el país, hicieron la diferencia entre la vida y la muerte durante y después del terremoto, dando nueva vida a los sentidos públicos.

Sugerimos que las distintas prácticas espaciales (el uso del espacio geográfico) elaboradas por actores sociales asociados a organizaciones públicas y privadas, se diferenciaron de acuerdo al nivel de penetración del Estado y la gran empresa en el tejido social de la ciudadanía. Las grietas socioespaciales que quedaron al descubierto, exigen acciones que resuelvan no solo la urgencia de las materialidades, sino también la reconstrucción de sentidos y espacios vividos que sitúen en el centro de la mirada a las personas en su distinto posicionamiento en las estructuras de poder y capacidad de agencia. La experiencia vivida por sujetos plurales y situados –madres y padres, trabajadores, dirigentes sociales– devela el proceso dialéctico en la construcción social del espacio que pone de manifiesto las formas concretas en que espacio y procesos de exclusión y resistencia interactúan e impactan uno sobre el otro.

## **Bibliografía**

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Decreto Ley 70. Título I, artículo 1, 2, 3 y 4. [En línea], <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6294> [20 de enero, 2013].

CARNEIRO, P.; GALASSO, E., y GINJA, R. 2009. “The Impact of Providing Psycho-Social Support to Indigent Families and Increasing their Access to Social Services: Evaluating Chile Solidario”. [En línea], UCL y World Bank, [www.ucl.ac.uk/~uctprcp/chile.pdf](http://www.ucl.ac.uk/~uctprcp/chile.pdf). [24 de abril de 2013].

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS CIUDADANOS. 2012. Plantaciones Forestales a Gran Escala y Desarrollo Territorial: Temas Críticos, Propuestas de Gestión Empresarial y Política Pública para la Región de Los Ríos. Agrupación Eco-Región Agenda Local 21. [En línea], [http://www.losrioscomovamos.cl/dm-documents/Documento\\_Plantaciones\\_a\\_gran\\_escal.pdf](http://www.losrioscomovamos.cl/dm-documents/Documento_Plantaciones_a_gran_escal.pdf) [10 de mayo de 2013].

CONAF. 2011. Plantaciones Forestales. [En línea], <http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/>. [20 de enero].

CORREA, N. 2007. “Programas de Transferencias Condicionadas: aportes para el debate público”. [En línea], Disertación de maestría. London School of Economics and Political Science. <http://www.cies.org.pe/files/economia-sociedad/71-correa.pdf>. [20 de abril].

DE SOUZA SANTOS, B. 2001. “Los nuevos movimientos sociales”. [En línea], <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal5/debates.pdf>, *OSAL* 2001. [12 de enero de 2012].

EL CIUDADANO. 2013. Poderosos y sus políticos ofrecen más incentivos para la destructiva industria forestal. [En línea], <http://www.elciudadano.cl/2013/07/15/73452/poderosos-y-sus-politicos-ofrecen-mas-incentivos-para-la-destructiva-industria-forestal/>. [10 de mayo del 2013].

EL SUR. 2013. 693 familias pasan cuarto invierno en mediaguas. *Crónica Diario El Sur*, miércoles 10 de julio de 2013/Año 131- Edición 45101, p. 4.

EMA, J. E. 2004. Del sujeto a la agencia (a través de lo político). *Athenea Digital*. Nº 5, primavera 2004. [En línea], <http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34133/33972> [10 de diciembre de 2013].

ENGEL, E., FISHER, R., y GALETOVIC, A. 1997. “Cómo licitar una concesión vial urbana”. *Revista de Estudios Públicos*, Nº 67, Chile.

FERNÁNDEZ, S. 2011. Introducción a la charla magistral ‘La recuperación de la ciudad en la lucha anti-capitalista’ brindada por David Harvey el 21 de octubre del 2011, organizada por el Departamento de Geografía, Universidad de Concepción. *Revista Geográfica del Sur*, Vol. 3, pp. 11-14.

FUNDACIÓN TERRAM. 2012a. “*Bosque Nativo y Plantaciones*”. [En línea], [http://www.terram.cl/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3569](http://www.terram.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=3569), [8 de abril].

FUNDACIÓN TERRAM. 2012 b. *Posición de la AIFBN sobre las plantaciones forestales monoespecíficas y en gran escala*. [En línea], [http://www.terram.cl/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2372](http://www.terram.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2372), [8 de abril].

GOBIERNO BIOBÍO. 2007. INE Regional entregó resultados preliminares del VII Censo Agropecuario, 22 de noviembre de 2007. [En línea], <http://www.gobiernobiobio.cl/index.php?menu=5&id=5450>, [20 de enero 2014].

GOBIERNO DE CHILE (a). Estatuto de la Inversión Extranjera: DL 600. [En línea], [http://www.sii.cl/portales/inversionistas/info\\_inversionistas/dl600.htm](http://www.sii.cl/portales/inversionistas/info_inversionistas/dl600.htm), [10 de mayo].

GOBIERNO DE CHILE (b). Comité de Inversiones Extranjeras. [En línea], [http://www.inversionextranjera.cl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=123&Itemid=95](http://www.inversionextranjera.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=95), [11 de mayo].

GOBIERNO DE CHILE (c). Reglamento del Decreto Ley No 701, Ley sobre Fomento Forestal. [En línea], <http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/legislacion/complementaria/dl701.htm> [11 de mayo].

GOBIERNO DE CHILE (d). Ministro de Vivienda de EE.UU visita Chile para conocer la reconstrucción de viviendas tras el 27F. [En línea], <http://www.gob.cl/informa/2014/01/06/ministro-de-vivienda-de-ee-uu-visita-chile-para-conocer-la-reconstruccion-de-viviendas-tras-el-27f.htm>, [06 de enero de 2014].

GOBIERNO DE CHILE (e). Plan Región del Bío Bío 2010-2014 del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. *Gobierno Regional Bío Bío*. [En línea], <http://www.gorebiobio.cl/Documentos/CuentaPublica/PlanBioBio.pdf>.

GONZÁLEZ, R. 2008. Poderes locales, Nación y Globalización. Historia de teorías y debate contemporáneo. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ISBN 978-956-7382-21-7.

HARVEY, D. 2004. *El Nuevo imperialismo*. Barcelona: Akal.

HARVEY, D. 2011. "Feral Capitalism Hits the Streets". [En línea], <http://davidharvey.org/>. (Traducción Sandra Fernández), [10 de octubre de 2011].

HUBER, IROMÉ, MOHR y FRENE. 2010. Efecto de plantaciones de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* sobre el recurso agua en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío, Chile. *Revista Bosque (Valdivia)*, V. 31, N° 3. 210-230, ISSN 0717-9200, [En línea], [http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0717-92002010000300006&script=sci\\_arttext](http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0717-92002010000300006&script=sci_arttext), [10 de abril de 2013].

ILO. 2013. El Trabajo Decente en la Industria Forestal en Chile. Documento de trabajo. Santiago: Organización Internacional del Trabajo. ISBN 978-92-2-327441-2.

INE. 2011. Superficie sembrada por cultivos esenciales. Área Geográfica: Región del Bío Bío. Banco de datos, Región del Biobío. [En línea], <http://www.inebiobio.cl/app/bdatos/vista.asp?id=123>, [20 de enero de 2014].

INFOR. 2009. Superficie de plantaciones forestales. Regiones de Coquimbo a Aysén; e inventario plantaciones PYMP regiones Bío Bío y Araucanía. *Informe Técnico*. INFOR-MINAGRI 2009.

INFOR. 2009. Superficie de plantaciones forestales regiones de Coquimbo a Aysén; e inventario plantaciones PYMP Regiones Biobío y Araucanía. INFOR, *Informe Técnico*. Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura.

KAY, C. 1998. Estructuralismo y teoría de la dependencia en el periodo neoliberal. Una perspectiva latinoamericana. *Nueva Sociedad*, N° 158, noviembre-diciembre, pp. 100-119.

KLEIN, M. 1997. “Los requisitos de una política global de infraestructura vial”. *Revista de Estudios Públicos* N° 65, Chile.

LA TERCERA. 2013. Chile se ubica entre las 10 economías más atractivas para la inversión extranjera. [En línea], <http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/06/655-530111-9-chile-se-ubica-entre-las-10-economias-mas-atractivas-para-la-inversion.shtml>, [26 de junio de 2013].

LEFEBVRE, H. 1991. *The production of space*, Oxford: Blackwell.

LETELIER, F. y BOYCO, P. 2011a. “Articulaciones ciudadanas pos-terremoto: ¿Un nuevo paso en la construcción del derecho a la ciudad?”. En *Temas Sociales*, No 69. Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación, Santiago, pp. 1-9.

LETELIER, F. y BOYCO, P. 2011b. “Talca pos-terremoto: una ciudad en disputa. Modelo de reconstrucción, mercado inmobiliario y ciudadanía. Santiago: Ediciones Sur.

McDOWELL, L. y MASSEY, D. 1984. “A Woman’s Place?”. In, Doreen Massey and John Allen (eds.), *Geography Matters! A Reader*. Cambridge: Cambridge University Press in Association with the Open University, pp. 124-47.

MINVU. 2014. Ministro de Vivienda de EE.UU. visita Chile para conocer la reconstrucción de viviendas tras el 27F. [En línea], <http://www.gob.cl/informa/2014/01/06/ministro-de-vivienda-de-ee-uu-visita-chile-para-conocer-la-reconstruccion-de-viviendas-tras-el-27f.htm>, [06 de enero de 2014; 27 de febrero de 2014].

MOLYNEUX, M. 2009. “Conditional cash transfers: pathways to women’s empowerment?”, *Pathways Brief*, N° 5.

MONTALVA, R. y CARRASCO, N. 2004. Modelo forestal chileno y conflicto indígena ¿ecologismo cultural mapuche?, *Debates ambientales*, N° 26, pp. 63-77.

MURDOCH, J. 2006. *Post-structuralist geography. A guide to relational space*. London: Sage Publications.

PESSÔA, L. 2009. A materialização do circuito italiano de turismo rural (CITUR), Colombo-PR: verticalidades, horizontalidades e intencionalidades. *Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía*, UNAM. N° 69, pp. 96-112.

PILE, S. y KIETH, M. (Eds.). 1997. *Geographies of Resistance*. London: Routledge.

PYLE, L. y HARDINGS, S. 2009. "Neoliberalism, INGO practices and sustainable disaster recovery: a post-Katrina case study. *Community Development Journal*, Vol. 46, April 2011, pp. 168-180.

PYLE, L. y HARDINGS, S. 2011. "Discourses of post-Katrina reconstruction: a frame analysis. *Community Development Journal*, Advance Access published March 31, 2011. DOI:10.1093/cdj/brs023. [En línea], <http://cdj.oxfordjournals.org/content/early/2011/03/30/cdj.bsr023.short?rss=1>, [14 de mayo].

REPÚBLICA DE CHILE, SENADO. 2011. 'Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones de Vegetales se aprobó por mayoría'. [En línea], [www.senado.cl/prontus\\_galeria\\_noticias/.../20110511204605.html](http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/.../20110511204605.html), Valparaíso | 11/05/2011 | Departamento de Prensa | Boletín N° 6426-10. [12 mayo de 2011]

RETAMAL, ZAGAL y FERNÁNDEZ. 2012. "El 'Derecho a la Ciudad' en tensión. La Toma de Pedro de Valdivia Bajo, Concepción". Universidad de Concepción, inédito.

RETAMOZO y GARRIDO. 2010. "Orden y conflicto: reestructuración neoliberal y respuestas colectivas de los sectores populares urbanos en Chile y Argentina". *Revista Lider* Vol. 17 Año 12 2010 pp. 95-117. ISSN: 0717-0165-95-117

SANTANDER, P. 2011. Por qué y cómo hacer análisis de discurso. *Cinta moebio* 41: 207-224 [En línea], [www.moebio.uchile.cl/41/santander.html](http://www.moebio.uchile.cl/41/santander.html), [30 de abril].

SANTOS, B. 2001. "Los nuevos movimientos sociales". [En línea], [http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Los\\_nuevos\\_movimientos\\_sociales\\_OSAL2001.pdf](http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Los_nuevos_movimientos_sociales_OSAL2001.pdf), [10 de enero de 2013].

SANTOS, M. 1996. *La Naturaleza del Espacio. Técnica y Tiempo. Razón y Emoción*. España: Ariel.

SANTOS, M. 2004. *Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia universal*. Bogotá: Edición del Convenio Andrés Bello.

SCHILD, V. 1998. 'New Subjects of Rights? Women's Movements and the Construction of Citizenship in the New Democracies'. En: Álvarez, Sonia; Dagnino Evelina, and Escobar, Arturo (eds). 1998. *Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements*. Boulder, Colo.: Westview Press.

SILVEIRA, M. L. 2007. Los territorios corporativos de la globalización. *Geograficando* 3 (3). [En línea], [www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art\\_revistas/pr.3665/pr.3665.pdf](http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3665/pr.3665.pdf) [20 de enero de 2012].

SILVEIRA, M. L. 2009. Región y división territorial del trabajo: desafíos en el periodo de la globalización. *Investigación y Desarrollo*, Vol. 17, N° 2, pp.434-455. Universidad del Norte, Colombia. [En línea], [http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-32612009000200010&lng=es&nrm](http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612009000200010&lng=es&nrm).

SILVEIRA, M. L. 2010. Nuevo orden espacial de la globalización: encrucijadas y horizontes. *Revista Geográfica Espacios* 1, pp,1-17. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile.

TAMAYO, J. J. 2004. “Boaventura de Souza Santos: Hacia una sociología de las ausencias y de las emergencias”. [En línea], [http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/Hacia\\_una\\_sociologia\\_de\\_las\\_ausencias\\_y\\_de\\_las\\_emergencias.pdf](http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/Hacia_una_sociologia_de_las_ausencias_y_de_las_emergencias.pdf), [24 de mayo].

TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. 2000. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Ediciones Paidós, tercera edición. [En línea], <http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/10/biblio/10TAYLOR-S-J-BOGDAN-R-Methodologia-cualitativa.pdf>.

Fecha de recepción: 1 de junio de 2014

Fecha de aprobación: 1 de octubre de 2014

© 2015 por los autores; licencia otorgada a la Revista Universitaria de Geografía. Este artículo es de acceso abierto y distribuido bajo los términos y condiciones de una licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite [http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/deed.es\\_AR](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/deed.es_AR)